



Honduras, a un año del golpe

FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR

Director del Observatorio de la Migración.

El análisis de la situación en Honduras, a un año de distancia del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, permitirá revisar con objetividad los argumentos en contra del golpe de Estado ocurrido en ese país centroamericano el 28 de junio de 2009.

La ofensiva mediática lanzada por el gobierno *de facto* encabezado por Roberto Micheletti y por los corifeos que intentaron presentar el golpe de Estado como una acción constitucional, crearon una gran confusión entre el público latinoamericano. Los artículos publicados en su oportunidad en *Este País*¹ y este ensayo intentan clarificar esta situación y analizar las razones por las que este golpe de Estado atenta gravemente en contra del orden constitucional y la democracia, y que sus intentos para justificarlo tienen efectos más allá de las fronteras de Honduras y erosionan el concepto del Estado de derecho a nivel internacional, lo que a futuro pudiese conducir a la aceptación de la remoción de cualquier régimen constitucional por la fuerza con base en retorcidos argumentos legales.

Es el caso de Victoriano Huerta en México, quien usurpó la presidencia sustentado en fundamentos perfectamente constitucionales, sin que por ello su toma del poder por medio del asesinato y de las armas tuviera legitimidad.

En el caso de Honduras lo que aquí se juzga no es la personalidad del ex presidente Manuel Zelaya ni las imprudentes acciones que precedieron a su deposición; el objeto de este análisis es clarificar las distorsiones tendientes a presentar como constitucional la salida de Manuel Zelaya de la presidencia y señalar las consecuencias de eventuales situaciones en otros países, de aceptar la argumentación de los golpistas y de aquellos que los apoyaron confundiendo a la opinión pública.

El derrocamiento de Manuel Zelaya rebasa las fronteras de Honduras y se inscribe en la lucha por el poder y el control de los recursos naturales en Latinoamérica, y está íntimamente ligado al enfrentamiento ideológico entre el capitalismo occi-

dental y diversos regímenes de Centro y Sudamérica, los que tienen como caso extremo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Resulta difícil creer que los servicios de inteligencia estadounidenses en Honduras no tuvieran conocimiento de los preparativos del golpe de Estado, si consideramos las estrechas relaciones existentes entre las fuerzas armadas hondureñas y Estados Unidos. Ciertamente, las autoridades estadounidenses deben haber visto con satisfacción la salida de Manuel Zelaya por su acercamiento con Hugo Chávez y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

No obstante, resultaría aventurado afirmar que el gobierno de Estados Unidos tuvo una intervención directa en la deposición de Manuel Zelaya. Quienes pudieran afirmarlo desconocen las estructuras de poder en la Unión Americana. Es común que se piense que las posiciones de Estados Unidos sean exclusivamente las de su gobierno, pero no necesariamente es así. Los grupos conservadores tienen una influencia y recursos considerables que aportar, y de hecho intervienen en la política interior de otros países de múltiples maneras.

No cabe duda, por otra parte, de dónde estaban las simpatías del Partido Republicano y de la base conservadora en el Congreso de Estados Unidos, los que estuvieron presionando al presidente Obama por la condena al golpe de Estado y haciendo expresiones públicas de apoyo al régimen de Roberto Micheletti.

Los diseñadores del golpe de Estado establecieron dos líneas de acción alrededor de las cuales basaron su estrategia para el derrocamiento de Manuel Zelaya y para la transición del gobierno *de facto* hacia un régimen supuestamente democrático, "legitimizando" así las acciones golpistas.

En la primera etapa lanzaron una campaña mediática a nivel interno y a nivel internacional, intentando presentar la salida de Manuel Zelaya como resultado de una acción constitucional, y no

como una deposición por la fuerza de las armas de un gobernante electo legalmente y la imposición de un gobierno *de facto*.

La argumentación presentada por Roberto Micheletti en una publicación aparecida en el *Washington Post*, en agosto de 2009, para justificar el golpe de Estado, es el mismo discurso que distintos comunicadores latinoamericanos y congresistas republicanos en Estados Unidos estuvieron diseccionando en diversos foros. La coincidencia de argumentos en todos los casos hace pensar en un hilo conductor común.

Sin embargo, la calidad moral de alguno de estos actores ha sido cuestionada por distintas fuentes y ofrece una orientación sobre el origen de esta campaña. Tal es el caso de Joaquín Villalobos, quien se presenta actualmente como consultor internacional para la resolución de conflictos, y que anteriormente fue un dirigente guerrillero del ERP en el conflicto armado en El Salvador, y posteriormente en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hasta 1994, fecha en que se separó de sus antiguos compañeros de lucha cambiando de signo y afiliándose a la socialdemocracia, y posteriormente colaborando en materia de seguridad con los regímenes pertenecientes al partido Arena, del presidente Francisco Flores y Antonio Elías Saca, que agrupaba a los sectores militares y empresariales de derecha que dieron origen a la guerra civil que asoló a El Salvador entre 1980 y 1992. Lo que se le ha reprochado a Villalobos no es que haya cambiado de ideología, sino ponerse al servicio de los gobiernos que anteriormente combatió.²

Joaquín Villalobos fue contratado por el gobierno de Álvaro Uribe para la lucha contrainsurgente en Colombia y por el gobierno de México en el conflicto de Chiapas en 1994. Ha sido contratado por el gobierno del presidente Felipe Calderón en cuestiones de seguridad y publicó recientemente un documento de mercadeo político intitulado "Doce mitos de la guerra contra el narco", en donde justifica la estrategia en el combate al crimen organizado emprendida por esta administración, estrategia que ha sido seriamente cuestionada en diversos foros y por distintos especialistas.

Estas plumas mercenarias de personajes que en alguna ocasión militaron en la izquierda revolucionaria y que ahora se presentan como representantes de la izquierda democrática, pero que en

realidad hacen causa con la derecha autoritaria, son utilizados para difundir mensajes por consigna de sus empleadores y crean desinformación en el público desconocedor de sus antecedentes, haciéndolos aparecer como analistas objetivos con credenciales intachables.

A estas alturas nadie duda que se rompió el orden constitucional por el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. En cuanto a la legitimación de las elecciones celebradas en noviembre de 2009 y la aceptación en la presidencia de Honduras de Porfirio Lobo, la prudencia diplomática apunta hacia observar su actuación y la evolución de los acontecimientos en Honduras bajo su administración, y el restablecimiento del Estado de derecho.

Si bien las condiciones existentes para la elección de Porfirio Lobo no permitieron la integración de un gobierno de unidad nacional de conformidad con el Acuerdo de Tegucigalpa, debe aceptarse que el presidente Lobo ha hecho un gran esfuerzo para normalizar la situación en Honduras y distender el ambiente político mediante la negociación para la salida del ex presidente Zelaya de la representación brasileña hacia la República Dominicana; el cese del jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, quien dirigió el golpe militar contra el entonces presidente Zelaya; y la liberación del ex ministro de Defensa, Aristides Mejía, y la ex ministra de Energía, Mayra Mejía, dos colaboradores del depuesto presidente acusados de fraude. Roberto Micheletti fue declarado senador vitalicio durante su actuación al frente del gobierno *de facto*, por lo que cuenta con inmunidad legislativa.

Sin embargo, a un año del golpe siguen sin cumplirse los puntos del Acuerdo de Tegucigalpa en relación con el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la convocatoria para una Asamblea Constituyente; una parte de la comunidad internacional continúa sin reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, y Honduras sigue suspendida de la Organización de Estados Americanos. La Sociedad Interamericana de Prensa reporta la escalada de violencia en contra de periodistas, señalando el asesinato de nueve periodistas en 2009 y las continuas presiones en contra de la prensa opositora.

México recientemente restableció relaciones a nivel de embajada y el embajador Tarcisio Navarrete retornó a Tegucigalpa para continuar sus funcio-

nes. Parece una medida en la dirección correcta por parte de la Cancillería en apoyo de los esfuerzos del presidente Lobo para resolver la crisis en Honduras. No obstante, habrá que insistir en el cumplimiento del Acuerdo de Tegucigalpa. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Estados Unidos han restablecido los créditos y apoyos económicos suspendidos a consecuencia del golpe de Estado, con lo que se va normalizando la situación.

Sin embargo, la tarea de recuperar la armonía nacional y el Estado de derecho se ve obstaculizada por la profunda división en la sociedad hondureña y la polarización política existente. En fecha reciente el presidente Lobo salió a declarar en contra del rumor en el sentido de que pudiese estarse fraguando un segundo golpe de Estado derivado de las gestiones para autorizar el retorno de Manuel Zelaya a Honduras. En el fondo, los grupos de presión de la derecha están enviando un mensaje ominoso al presidente Lobo, lo que confirma la fragilidad de la democracia hondureña.

Las negociaciones para el retorno de Manuel Zelaya a Tegucigalpa se enmarcan dentro de las pláticas para la reinstalación de Honduras en la Organización de Estados Americanos. Un paso en ese sentido es el desistimiento del ministerio público de las acusaciones de traición a la patria, corrupción, abuso de autoridad, usurpación de funciones y otros catorce cargos relacionados, por las que existe orden de captura en contra del ex mandatario.

Parte de las negociaciones para el retorno de Zelaya incluyen un pacto para la realización de reformas estructurales y políticas en Honduras, a las que se oponen grupos conservadores que apoyaron el golpe de Estado. El presidente Porfirio Lobo ha ofrecido viajar a la República Dominicana y acompañar a Zelaya a Tegucigalpa, así como garantizarle que no será encarcelado. Los negociadores de Manuel Zelaya en Honduras han mencionado el posible retorno del ex presidente para agosto o septiembre de este año.

A final de cuentas Honduras resultó perdedora en los juegos de poder en el continente americano y rehén de la política por el control de los recursos naturales en Latinoamérica. Preocupa la escalada militar en América Latina. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el gasto militar ha aumentado 151% en los últimos seis años, y es Brasil el primero en toda Latinoamérica con 27 mil millones de dólares y el décimosegundo en el mundo; le sigue Colombia con 10 mil millones, y Chile con 5 mil.³ A su vez Venezuela ha adquirido de Rusia gran cantidad de armamento como respuesta a la escalada.

El Plan Colombia y el acuerdo para la utilización de las bases militares colombianas por el ejército de Estados Unidos ha causado profundas reservas entre los gobiernos del Cono Sur y tensiones entre los países limítrofes y Colombia.

Lo sucedido en Honduras puede ocurrir en cualquier parte de América Latina; particularmente si se encuentran involucrados el control de materias primas críticas, como puede ser el petróleo u otros minerales estratégicos. Es por ello que debemos estar atentos a no aceptar las versiones que nos quieren hacer aceptar lo inaceptable mediante recursos mediáticos y la desinformación.

México es un país con grandes recursos energéticos. Pongamos atención.

- 1 "La crisis en Honduras" y "Reflexiones sobre la crisis en Honduras", *Este País*, 2009.
- 2 Joaquín Villalobos participó en la ejecución del poeta salvadoreño Roque Dalton, compañero del ERP, y en el secuestro y asesinato del empresario Ernesto Regalado Dueñas.
- 3 José Antonio Medina Ibáñez, *El Universal*, agosto de 2010.